

**Conn, James J.-Sabbarese, Luigi (a cura di),** *Iustitia in caritate. Miscellanea in onore di Velasio De Paolis*, Urbaniana University Press, Roma 2005, 548 pp.

Después de la *Laudatio* al destinatario de estas *Miscellanea* por el profesor Navarrete, ahora Cardenal de la Santa Iglesia Romana, M. Kovac hace el elenco de los numerosos trabajos de Mons. Velasio De Paolis (pp. 19-37). En esta obra figuran veintinueve estudios ofrecidos al homenajeado, que se agrupan en seis partes.

La primera, sobre cuestiones de historia, filosofía y teología del Derecho, se abre con un artículo de Brian E. Ferme, «*Quinque Compilationes Antiquae*»: *A turning-point in the History of Canon Law* (pp. 41-55). El *Liber Extra* cambió profundamente la percepción del Derecho canónico en la Iglesia, señalando el predominio de las *auctoritates rationis* sobre la *ratio auctoritatis*, como se puede apreciar ya en Inocencio III, más aún en Honorio III y sobre todo en Gregorio IX. La impronta de este Papa en el Derecho canónico difícilmente hubiera podido realizarse sin la novedad de la *Compilatio tertia* y de la *Compilatio quinta*, que fueron los fundamentos esenciales para la victoria del *ius novum*.

El Cardenal Péter Erdö examina el *Derecho canónico como representante de la cultura jurídica europea en Hungría y en Polonia en el Medioevo* (pp. 57-65). El famoso *Tripartitum* de István Werbűczy, grandioso resumen del derecho «consuetudinario» húngaro a finales del Medioevo, está lleno de elementos, nociones, referencias procedentes del Derecho romano, del *ius commune*, en especial a través del Derecho canónico. La herencia de la cultura del derecho común ha

ejercido su influencia en Hungría hasta la segunda Guerra mundial. El renacer de la cultura jurídica húngara y polaca en Europa occidental significa el volver a descubrir este patrimonio del Derecho romano y la actualidad de la investigación y la enseñanza de esta disciplina en las universidades.

Ottavio De Bertolis trata de *los fundamentos onto-gnoseológicos del derecho en Santo Tomás de Aquino* (pp. 67-86). Tenemos experiencia tan sólo de la *lex*, en el mundo del derecho, ley entendida como orden racional impreso por nosotros en las cosas. Este orden es necesariamente un intento de traducción, concreto y falible, de un orden inteligible, que es *ius*. La justicia precede a la ley, y la fundamenta, es condición para que pueda ser pensada (*intellectus*) y existir (*esse*), como el *essere* precede al ente. Añade el autor que sólo la metafísica es baluarte contra todo tipo de ideología, o sea, contra la convicción de que basta un «sistema» humano para establecer la justicia.

*Ética y derecho. En búsqueda de un fundamento común* (pp. 87-103) es el tema desarrollado por Cataldo Zuccaro, en especial en el campo de la bioética. Después de plantear la cuestión en su marco histórico, en el que se aprecia una evolución semántica de la tolerancia, intenta volver a descubrir un fundamento antropológico tanto en la ética como en el derecho, acudiendo para ello a la mediación de la teología. Ya desde el principio, el autor señala que no pueden negarse los presupuestos de fe, que iluminan su horizonte de comprensión; y a veces salen a relucir explícitamente para mostrar que existe una especie de continuidad y no de ruptura entre la dimensión antropológica y la teológica de la única verdad que se refiere al hombre.

Vemos a continuación la comparación entre *Justicia y misericordia. Una contribución a partir del Antiguo Testamento* (pp. 105-112), por Ambrogio Spreafico, en el que se pasa de la *vendetta* a la justicia, para ir más allá de la condena; se apunta a la justicia hacia los pobres como una justicia con misericordia y se identifica al pobre con el justo.

Carlos J. Errázuriz M. se plantea una pregunta acerca de la configuración del derecho divino y del derecho humano en la Iglesia (pp. 113-122), entendiendo por «configuración del Derecho canónico» aquel proceso en virtud del cual se establece o se modifica aquello que es justo en la Iglesia. Para conocer el *quid iuris?* el canonista ha de considerar siempre las fuentes canónicas que se refieren a la respectiva materia o caso. Pero no pueden reducirse las fuentes a las solas normas de carácter general (sobre todo las leyes), porque significaría olvidarse de las fuentes del Derecho divino, así como de otras fuentes del Derecho humano de índole singular, procedentes sea de la autoridad jerárquica en sus funciones administrativa y judicial, sea de los fieles en cuanto tales.

Los fundamentos teológicos del derecho eclesial son presentados por Gianfranco Ghirlanda (pp. 123-141). El Derecho eclesial positivo, que regula las relaciones entre los fieles y las Iglesias particulares, se fundamenta no sólo en el Derecho divino natural sino principalmente en el Derecho divino revelado. Numerosos cánones del CIC son de hecho cánones dogmáticos ya que expresan de modo inmediato ese Derecho divino revelado. El canonista debe por tanto estudiar lo «jurídico dogmático». Debe al mismo tiempo explicar el método propio de las ciencias jurídicas y estudiar las le-

yes y normas vigentes en el ordenamiento canónico actual, así como las instituciones, ya en su singularidad ya en el conjunto de sus relaciones. El canonista ha de ser por tanto a la vez teólogo y jurista. Las ciencias humanas son útiles y a veces necesarias, pero no pueden explicar el misterio del hombre y de la Iglesia.

*El legislador eclesial y el legislador civil. Notas sobre un elemento de su papel* (pp. 143-158). Con este título, Francesco Coccopalmerio quiere subrayar que tanto el legislador eclesial como el civil están llamados a conocer los derechos ontológicos de un sujeto para poder determinar los deberes ontológicos de los demás sujetos. El legislador eclesial tiene capacidad para leer la ontología y por tanto declararla. El legislador civil puede adherirse a la visión de una doctrina religiosa y asumir la visión de los sujetos que proponen tal doctrina. Tiene el deber de cumplir su función siguiendo el principio de libertad religiosa o de libertad de conciencia, pero no puede determinar para nadie el deber de aceptar una visión religiosa, aunque sí tiene el derecho de determinar para todos el deber de no lesionar o el deber de conferir los bienes necesarios a los demás sujetos.

*La posición del derecho particular después de la nueva codificación* es la siguiente contribución, a cargo de Eduardo Baura (pp. 161-177). El sistema canónico vigente relativo a la relación entre derecho universal y particular tiene un carácter histórico, aunque responde a algunos postulados dogmáticos que derivan de la constitución inmutable de la Iglesia. Muchas de las soluciones del Derecho canónico no pueden transferirse al Derecho civil y no es posible que el ordenamiento canónico cambie las instituciones civiles. La costumbre y la dispen-

sa pueden constituir una contribución de la canonística a la cultura jurídica general porque permiten que el ordenamiento jurídico sea más en conformidad con la realidad y más eficaz.

Bruno Esposito escribe sobre *el Código de Derecho Canónico latino y las leyes litúrgicas* (pp. 179-214). Partiendo del can. 2 CIC, hace un breve recorrido histórico por las intervenciones de parte de las autoridades competentes de la Iglesia en materia litúrgica, y averigua lo que se entiende por «ritos», «celebrar las acciones litúrgicas» y «leyes litúrgicas». Tras clarificar el sentido de estos términos y expresiones utilizadas por el mencionado can. presenta el significado preciso de la normativa vigente a la luz de la tradición.

*Algunas consideraciones acerca del problema de la dispensa de las leyes disciplinares.* El can. 87 § 1 CIC (pp. 215-225), can. que supone una «revolución copernicana», como explica Andre D'Auria. Para él, la equiparación entre leyes disciplinares y leyes eclesiásticas es por lo menos rápida y no lo suficientemente fundamentada, y además podría crear una cierta confusión en el seno de la actividad propia de la Autoridad de la Iglesia.

*The Mandate on can. 812 Revisited* por James J. Conn es la siguiente comunicación (pp. 227-248). El autor se propone volver a examinar la exégesis clásica del mencionado can., discutir su cumplimiento en los Estados Unidos en aplicación de las respectivas orientaciones de los obispos americanos, y ofrecer algunos comentarios críticos desde la perspectiva de la naturaleza del mandato en cuanto acto administrativo y habida cuenta de su finalidad.

Con esto llegamos a la IIIa parte, dedicada al Pueblo de Dios, y que se abre

con un texto de Giuseppe Dalla Torre: *De la «Unam Sanctam» a la «Gaudium et Spes».* *Consideraciones sobre la potestad pontificia* (pp. 251-263). La teoría de la *potestas magisterii* tiene raíces magisteriales y expresa un núcleo esencial ya presente en la teorización sobre la *potestas directa* y la *potestas indirecta* despojada de todo residuo temporal y de toda pretensión teocrática. El autor examina la aplicación de la *potestas pontificia* a la Universidad.

Patrick Valdrini expone *La reforma de las provincias eclesiásticas en la Francia metropolitana.* *El decreto de 8 de diciembre de 2002* (pp. 265-276). Examina las regiones apostólicas francesas presentes en los estatutos de la Conferencia episcopal gala, aunque no respondan al estatuto del can. 434 CIC. Presenta a continuación la reciente reforma de las provincias eclesiásticas en Francia mostrando sus relaciones con la Conferencia episcopal.

Juan Ignacio Arrieta habla *sobre la incardinación en las asociaciones de clérigos* (pp. 277-292), partiendo de la normativa vigente. Se remonta a los trabajos de revisión del Código, describe el contexto doctrinal de la incardinación, y la posición de los canonistas sobre la aplicación de la incardinación a la asociación, para acabar con algunas consideraciones generales sobre los argumentos propuestos: el problema del cambio de la naturaleza del vínculo, que no es de orden dogmático sino tan sólo técnico, de oportunidad prudencial.

*El Colegio de consultores: ¿abolición o redefinición?* es el interrogante planteado por Giacomo Incitti (pp. 293-312). Tras estudiar la historia del colegio de consultores en el Código de 1917 y en los tra-

bajos de codificación en los que aparece en el contexto de preocupaciones relativas al gobierno de la diócesis *sede vacante*, el autor se detiene en la naturaleza jurídica y la organización del colegio de consultores y su relación con el consejo presbiteral. Para él algunos temas quedan abiertos, como son las relaciones colegio de consultores-consejo presbiteral-consejo para los asuntos económicos, el gobierno de la diócesis *sede vacante*, y la cuestión de saber si el colegio de consultores es más eficaz que el consejo presbiteral. Plantea algunos problemas prácticos: periodicidad quinquenal, praxis abusiva y divergencia entre colegio de consultores y consejo para los asuntos económicos. Acaba con la presentación de los actuales organismos que podrían sustituir al colegio de consultores: el capítulo catedralicio, el consejo de la misión, el consejo de gobierno en la administración apostólica personal.

Robert J. Geisinger escribe sobre *Procuring and Archiving Documents in the Practice of Religious Law Internal to an Institute: a Procurator General's Perspective* (pp. 313-332). El autor recurre a la analogía: aquello que puede decirse de algunas documentaciones en determinadas áreas (por ej. archivo diocesano, procesos) puede ser informativo si se aplica *mutatis mutandis* a determinadas situaciones de la legislación sobre religiosos. Estudia algunos puntos en relación con los apostolados y las personas jurídicas, confidencialidad, «archivo secreto» en el gobierno de religiosos, el can. 487 § 2 en la vida religiosa por analogía, propiedad, y la cuestión del gobierno virtual con la irrupción de la informática.

La siguiente comunicación se pronuncia *por una pastoral de los emigrantes. Presupuestos y fundamentos* (pp. 333-

354). Luigi Sabbarese insiste en que el fundamento que ha de inspirar la acción de la Iglesia particular hacia los emigrantes es el principio de comunión, que ha de transparentarse también en los criterios de la territorialidad y de la personalidad. Como puntos introductivos, cabe destacar la comunión eclesial «abierta» frente al desafío de las migraciones, la catolicidad como «globalidad» y frente a la globalización. En la perspectiva de la evangelización y de las culturas, un enfoque teológico se impone para intentar una lectura teológica de las migraciones contando con que la Iglesia tiene una «conciencia cultural». Desde un punto de vista escatológico, se va de la diáspora hacia la *Ecclesia*: la perspectiva teológica de las migraciones denuncia la fragmentariedad de cada existencia, anuncia la relatividad del presente y por consiguiente de las culturas y preanuncia el carácter definitivo de la meta. Considerando las migraciones en su relación con las Iglesias particulares, ¿hay que estar por el «timore» del cerrarse o el «tremore» de la apertura? O sea, frente a la fragmentación de las migraciones está la permanencia de la Iglesia particular, que ha de salvaguardar la identidad de los migrantes. Por tanto, la pastoral de los emigrantes, más que de integración, ha de estar atenta a la comunión. Una mentalidad comunional ha de prevalecer. Por otra parte, la pastoral específica para los emigrantes es una expresión de la solicitud maternal de la Iglesia de tal modo que el emigrante no se considere nunca como extraño a la Iglesia particular en la que vive. Después de sentar algunos puntos firmes, el autor abre unas perspectivas para una ulterior profundización.

La IVa parte de estos «Miscellanea» trata sobre el matrimonio. Antoni Stan-

kiewicz abre esta parte con una exposición sobre *la Jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva* (pp. 357-372). La inmadurez afectiva se encuentra entre los factores que inciden en la capacidad consensual. En particular, influye en las facultades psíquicas dentro de las situaciones normativas de la incapacidad consensual del can. 1095, 2º y 3º, por defecto de libertad de elección, e incapacidad de discreción y de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.

*La relevancia de la cualidad personal en el matrimonio canónico* (pp. 373-383) es el tema desarrollado por Janusz Kowal. Hace falta primero definir aquello que se entiende por «cualidad», antes de ver el uso que se hace de ese término en el derecho matrimonial y la relevancia respectivamente de la cualidad sustancial y de la cualidad accidental.

Llegamos a la Va parte dedicada a los bienes temporales de la Iglesia. Vincenzo Mosca describe *el papel de la Jerarquía en la administración de comunión de los bienes de la Iglesia* (pp. 387-409), acudiendo al pensamiento del prof. V. De Paolis en algunos puntos. Conviene tener en mente algunos principios teológico-jurídicos: la Iglesia es una «comunidad jerárquica», en la que se da una diversificación de funciones por parte de los sujetos eclesiales, y el concepto de bien eclesiástico. Sentadas estas bases, se puede estudiar la administración comunitaria de los bienes de la Iglesia y en la Iglesia, viendo qué relación existe entre la jerarquía y las personas jurídicas en la Iglesia, mostrando que la administración de bienes es un acto específico, y subrayando la relación entre superior, administrador y consejo para los asuntos económicos. Queda entonces por ver cómo se ejerce el control de la autoridad supe-

rior, o sea, el Sumo Pontífice en cuanto administrador supremo, la Conferencia episcopal, la provincia eclesiástica, el obispo diocesano y los ordinarios del lugar y demás ordinarios. La jerarquía desempeña un papel educativo con respecto a la comunidad eclesial, bien a través del testimonio de una vida sobria, bien a través de una organización de la administración de los bienes eclesiásticos inspirada en los valores evangélicos.

*Las normas sobre los bienes temporales en los institutos religiosos* (can. 635) (pp. 411-429). Yuji Sagawara pone de relieve que el concepto de «pobreza colectiva» no es el mismo para todos los institutos y que por consiguiente no es fácil de definir aunque la regulan varios cánones del CIC. El can. 635 § 1 sienta una regla general sobre los bienes temporales de los institutos religiosos considerados como «bienes eclesiásticos». A los principios generales del Libro V hay que sumar algunos elementos peculiares de los institutos religiosos. Se precisan normas específicas para la administración de dichos bienes (can. 635 § 2), acudiendo también al derecho propio y a normas propias de la pobreza colectiva. Es deber de los institutos el proteger y desarrollar su carisma originario como don dado a toda la Iglesia.

Jesús Miñambres presenta *El Romano Pontífice, garante último de la destinación de los bienes eclesiásticos* (pp. 431-443). Parte del estudio de la dimensión teológica de los bienes temporales de la Iglesia: finalidad, titularidad, gestión y administración, régimen, para delinear las funciones asignadas al Romano Pontífice considerando la necesidad de gobernar estos bienes para que estén efectivamente destinados a los fines que justifican su posesión y uso. Uno de los

aspectos que hay que tener en cuenta es la autorización de la Sante Sede para la enajenación de determinados bienes. Hace notar el autor que el Romano Pontífice podría juzgar oportuno indemnizar con los bienes de la Santa Sede los daños causados por otra persona, pero que no se le puede exigir en justicia.

*La noción de bien cultural en el ordenamiento canónico* es estudiada por Giorgio Feliciani (pp. 445-455) centrandó su atención en las fuentes: codificación piobenedictina y disposiciones de la Curia romana, enseñanzas conciliares y revisión del Código, papel de la Comisión pontificia, de las convenciones internacionales y de la praxis concordataria. Con esta, la Santa Sede da a entender que se acoge, por lo menos en líneas esenciales, a la noción de bienes culturales adoptada por los organismos internacionales y los Estados.

Con esto, llegamos a la VIa y última parte sobre las sanciones y los procesos en la Iglesia, que se abre con un trabajo de Davide Cito llamado *Apuntes sobre la contribución científica del prof. Velasio De Paolis durante los trabajos de revisión del Derecho penal de la Iglesia latina* (pp. 459-472), limitándose a los puntos más salientes: existencia y naturaleza del derecho penal eclesial, relación entre fuero interno y fuero externo, y penas *latae sententiae*, estos dos últimos aspectos siendo corolarios del primero en cuanto derivan de la fisonomía propia del derecho penal. El Código ha acogido parte de las propuestas del prof. De Paolis.

*Consagración sacrílega: ¿pecado o delito?* se pregunta Damián G. Astigueta (pp. 473-497). La carta apostólica *Sacramentorum sanctitatis tutela*, de abril de 2001, aprueba unas normas de la Con-

gregación para la doctrina de la Fe sobre los «delitos más graves» contra los sacramentos y las costumbres, en las que se recoge la prohibición del can. 927, pero con la novedad de que se encuentra incluida dentro de una ley penal para un tribunal disciplinar. El autor hace la exégesis de los textos para delimitar el delito en su aspecto objetivo, recordar el principio de legalidad en el Código y en el can. 1399, y examinar cuál es el tribunal competente y el procedimiento que se ha de seguir.

El siguiente tema, *La investigación previa en los casos de abuso sexual de menores* (pp. 499-506) por parte de clérigos, está estudiado por Frans Daneels, habida cuenta de la legislación universal vigente en la materia. Estudia el desarrollo de la investigación previa en sus distintas fases, las medidas que han de tomarse *ad cautelam*, el delito y su prescripción desde el CIC de 1917 hasta ahora, y el secreto de oficio. En caso de abuso sexual de menores se impone tomar las medidas necesarias para proteger la comunidad pero a la vez no se pueden lesionar los principios fundamentales del derecho y del sentido común de la justicia. Es de desear un estudio y una discusión de parte de los canonistas para ofrecer una ayuda valiosa a los pastores.

Joaquín Llobell habla de *La tutela judicial de los derechos en la Iglesia. ¿Puede ser cristiano el proceso?* (pp. 507-522). Nota un rechazo instintivo del proceso canónico, cuando, de hecho, este proceso tiene una eclesialidad intrínseca, según se desprende de un texto como 1 Cor 6,1-7, y de la doctrina tanto de S. Agustín como de Santo Tomás de Aquino. Además el proceso canónico es una necesidad en la Iglesia ya que promueve la justicia. Por otra parte, los fieles tie-



nen derecho a un proceso equitativo y a que ninguna autoridad sea sustituida por los individuos para considerar si un derecho personal ha sido o no injustamente conculcado.

Por último, G. Paolo Montini estudia *Los tiempos suplementarios en los recursos jerárquicos ante la Curia Romana y el recurso a la Signatura Apostólica. El art. 136 § 2 del Reglamento General de la Curia Romana entre normativa, praxis y jurisprudencia* (pp. 523-548). En un primer momento, el autor aduce dieciocho decretos emanados de los Dicasterios de la Curia Romana en aplicación del art. 136 § 2 RGCR, que analiza a continuación, señalando que el fenómeno no es marginal y destacando la variedad de la praxis en cuanto a facultatividad, forma, momento, plazo y motivación. De allí saca una evaluación jurídica del mencionado art. 136 § 2: su congruencia formal y material con el can. 57, las condiciones de legitimidad: interpretación estricta, impugnabilidad del decreto, facultad de recurrir enseguida a la Signatura Apostólica, necesidad de indicar la duración de la prórroga. A continuación el autor hace algunas propuestas operativas. En su conclusión subraya que el atender pacientemente a la solución administrativa de la controversia ante el Dicasterio no debe volverse en contra de los derechos del recurrente y su defensa.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

**Erdő, Peter**, *Kirchenrecht im mittelalterlichen Ungarn. Gesammelte Studien*, Frank & Timme, Berlin 2005, 239 pp.

El actual Cardenal Arzobispo de Esztergom y Primado de Hungría fue durante años profesor de Derecho Canóni-

co en diversos centros docentes, particularmente en las Universidades Gregoriana de Roma y Péter-Pázmány de Budapest, en la que desempeñó el Rectorado entre 1998 y 2003. Universalmente reconocido por sus brillantes aportaciones a la ciencia canonística, ha sido miembro del Consejo Directivo de la *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, e incluso se ocupó de organizar uno de los Congresos periódicos de la misma en el prestigioso centro docente del que era Rector. Después de su elevación al Episcopado (1999), al Arzobispado (2002) y al Cardenalato (2003), y pese a la sobrecarga de tareas y deberes que ello le ha supuesto, Peter Erdő no ha abandonado sus estudios sobre el Derecho de la Iglesia, a los que sigue atendiendo en toda la medida de sus posibilidades.

En ese marco se inscribe la publicación del presente libro, que recoge una serie de trabajos salidos de la pluma del autor entre 1982 y 2001, si bien la mayor parte de los cuales proceden de la década de 1990-2000. Giran mayoritariamente en torno a un denominador común, y habiendo aparecido por vez primera en muy dispersas publicaciones, ciertamente que no resultaría hoy fácil localizarlos a todos, por lo que el autor rinde un útil servicio a los estudiosos del Derecho Canónico medieval dándolos a luz conjuntamente en este excelente volumen.

El denominador común al que me refiero es el que se expresa en el título mismo de la obra: el Derecho Canónico medieval, con especial atención a Hungría. Es evidente que entre la canonística en la que nos enmarcamos los miembros de la *Consociatio* —y en general en los centros docentes que poseen Facultades o enseñanzas de Derecho de la Igle-